



**Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
GENERAL

CCPR/C/70/Add.8
18 de julio de 1995

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITE DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
EN VIRTUD DEL ARTICULO 40 DEL PACTO

Tercer informe periódico que los Estados Partes
debían presentar en 1991

Adición

SRI LANKA*

[12 de julio de 1995]

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION	1 - 27	4
I. PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS .	28 - 80	8
A. Creación de una comisión nacional de derechos humanos	29 - 35	8
B. La Convención contra la Tortura	36 - 39	10

* El presente documento contiene información presentada por el Gobierno de Sri Lanka para completar su tercer informe periódico (documento CCPR/C/70/Add.6).

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. (<u>continuación</u>)		
C. Ley de inscripción de defunciones (disposiciones provisionales)	40 - 45	10
D. Sobornos	46 - 47	11
E. Medidas para el funcionamiento más eficaz del cargo de ombudsman	58 - 61	12
F. La situación de emergencia	62 - 67	13
G. Nombramiento de una comisión para investigar la violencia con motivo de las elecciones y recomendar el pago de indemnización por la pérdida de vidas	68 - 69	14
H. Nombramiento de un Comité para investigar los asuntos relacionados con las personas detenidas en virtud de la Ley N° 48 de 1979 de prevención del terrorismo y las normas de emergencia	70 - 72	14
I. Nombramiento de las comisiones para investigar denuncias de personas que se supone han sido desalojadas involuntariamente o han desaparecido de su domicilio	73 - 75	15
J. Indemnización a las familias de las víctimas de la insurrección	76 - 77	16
K. Establecimiento de un grupo de trabajo de derechos humanos	78 - 79	16
L. Grupo asesor en materia de derechos humanos	80	18
II. DESIGNACION DE UN COMITE ESPECIAL DEL PARLAMENTO SOBRE LA CONSTITUCION	81 - 83	18

INDICE (continuación)

Anexos 1/

- I. Acuerdo para el cese de hostilidades
- II. Ley de la Convención contra la Tortura
- III. Ley de inscripción de defunciones (disposiciones provisionales)
- IV. Proyecto de ley sobre el soborno y proyecto de ley sobre la comisión para investigar denuncias de soborno o corrupción (enmienda)
- V. Ley sobre la Comisión para investigar denuncias de soborno o corrupción
- VI. Ley N° 26 de 1994 sobre el Comisionado Parlamentario de la Administración (enmienda)
- VII. Ley de inscripción de defunciones (disposiciones provisionales)
- VIII. Ordenanza de seguridad pública

1/ Los anexos se pueden consultar en la secretaría.

INTRODUCCION

1. El 16 de agosto de 1994 se celebraron las elecciones para el décimo Parlamento de Sri Lanka. El Parlamento de Sri Lanka consta de 225 miembros, de los cuales 196 representan a 22 distritos electorales y los otros 29 son elegidos de entre las listas nacionales. En la elección se registró una participación del 76,24% de los votantes.
2. La Constitución de Sri Lanka establece el sistema electoral que se ha de seguir y prevé el cargo de comisionado electoral a efecto de procurar la imparcialidad, equidad y observancia de la ley en las elecciones.
3. El Gobierno de Alianza Popular fue elegido en elecciones pluripartidistas el 16 de agosto de 1994.
4. Un equipo de observadores internacionales, integrado por 44 personas procedentes de 12 países, vigiló el desarrollo de las elecciones. Los observadores se reunieron con organizaciones no gubernamentales y grupos locales antes y después de la votación. Dos grupos locales, la Alianza Popular para elecciones libres y justas (PAFFEL) y el Movimiento pro elecciones libres y justas (MFFE), también actuaron de observadores. Los observadores internacionales declararon que las elecciones se desarrollaron libre e imparcialmente.
5. La elección presidencial se celebró el 9 de noviembre de 1994 con una participación del 70,52% del electorado. Un equipo de observadores internacionales y dos grupos locales también supervisaron el desarrollo de la elección presidencial. La Presidenta Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, de la Alianza Popular, que recibió el 62% del total de los votos emitidos, fue elegida cuarto presidente del ejecutivo de Sri Lanka y asumió el cargo el 12 de noviembre de 1994. Alianza Popular defendió un programa de búsqueda de una solución duradera y pacífica del conflicto en el norte y el oriente del país, que la llevó al poder.
6. Así pues, el Gobierno de Alianza Popular tiene tres prioridades:
 - i) una solución política negociada de las cuestiones que afectan al norte y el oriente del país;
 - ii) la promoción y protección de los derechos humanos;
 - iii) la reforma constitucional para la descentralización.

La cuestión étnica

7. El Gobierno ha dado prioridad a la negociación de una solución política de las cuestiones que afectan al norte y el oriente. Para facilitar el proceso de paz y como medio de fomentar la confianza, en septiembre de 1994 se levantó parcialmente el embargo impuesto por motivos de seguridad al transporte de algunos productos al norte y el oriente. La primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y los Tigres de Liberación de

Tamil Eelam (LTTE) tuvo lugar en octubre de 1994, en Jaffna. La segunda ronda de negociaciones de paz, prevista para el 24 de octubre de 1994, fue suspendida después de un ataque con bombas contra una manifestación política de la oposición en que se dio muerte al candidato presidencial de la oposición y a más de 50 otras personas. El ataque suicida fue análogo a ataques anteriores de LTTE. A pesar de esta grave provocación, el Gobierno celebró la segunda ronda de negociaciones de paz con LTTE el 3 de enero de 1995.

8. Los principales elementos de la política del Gobierno en sus negociaciones con LTTE eran:

- a) La mitigación con las penalidades del pueblo tamil en el norte debidas al conflicto;
- b) La concertación con LTTE de un acuerdo para el cese de hostilidades;
- c) El logro de una solución permanente de los problemas del pueblo tamil en el norte y el oriente por medio de un diálogo político.

9. El acuerdo para el cese de hostilidades entró en vigor el 8 de enero de 1995 (véase el anexo I). Se establecieron comités de investigación de la violación de los términos del cese de las hostilidades (comités de paz) en las zonas de Jaffna, Mannar, Mullaitivu, Vavuniya, Trincomalee, Batticaloa/Amparai y en otras cuando se consideró necesario. En cada comité había dos personas que representaban al Gobierno y los LTTE. Los representantes designados por los Gobiernos del Canadá, Noruega y los Países Bajos presidieron los comités.

10. La adhesión del Gobierno al proceso de paz se manifestó en diversas medidas concretas adoptadas desde que comenzó el proceso de diálogo con LTTE.

- i) Para aliviar las penalidades del pueblo del norte debido al embargo de algunos productos por motivos de seguridad, se levantó el embargo de más de 70 productos. Sólo se mantuvieron las restricciones respecto de 8 productos que tenían consecuencias militares directas. El Gobierno adoptó otras medidas con prontitud para eliminar los obstáculos y formalidades de carácter administrativo que producían retrasos en el transporte de las mercaderías no sometidas a embargo. El combustible, cuyo suministro había estado restringido durante más de siete años, fue uno de los artículos que el Gobierno convino en enviar al norte.
- ii) El Gobierno manifestó su disposición de mitigar las dificultades económicas padecidas por la población en el norte debido a la veda de la pesca en una parte considerable de las aguas septentrionales y orientales por motivos de seguridad. La pesca ha sido un medio de vida importante para la población de las zonas costeras del norte y el oriente. El Gobierno levantó la prohibición salvo en un muy pequeño número de zonas claramente designadas, muy cercanas a campamentos militares en el norte. El Gobierno tenía la intención

de reconsiderar incluso esta limitada restricción en un plazo de tres meses para permitir la pesca en la totalidad de las aguas territoriales de Sri Lanka.

- iii) De primordial interés en la primera etapa de las negociaciones con LTTE fue la aplicación de medidas amplias de rehabilitación y reconstrucción en el norte y el oriente. Al efecto se desarrolló un conjunto de medidas por un valor de 39.000 millones de rupias. El Gobierno trató de aplicar un plan de reconstrucción de caminos, canales de riego, hospitales, escuelas y diversas otras comodidades de que se había visto privada la población durante todo el conflicto.

11. El Gobierno ha seguido la política coherente y firme de que el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de satisfacer las necesidades de toda la población en todas partes del país, sin diferencias.

12. Para normalizar las condiciones de vida de la población del norte y, en particular, para facilitar el rápido desarrollo del norte y el tránsito de vehículos a la península de Jaffna, el Gobierno convino en abrir el Elephant Pass y el camino de Sangupiddi que unen la península de Jaffna a la tierra firme. Esta medida también estaba destinada a facilitar el traslado de peregrinos desde Jaffna hasta Colombo durante la visita de Su Santidad el Papa. No obstante, no se pudo llegar a un acuerdo con los LTTE sobre esta cuestión porque condicionaban la abertura de un paso seguro hasta Jaffna al traslado del campamento militar ubicado cerca de la carretera Pooneryn-Sangupiddy. El Gobierno había señalado que la eliminación de ese campamento tenía claras repercusiones militares y perjudicaría la seguridad pública. Se indicó que habría que tratar esta cuestión en relación con los progresos que había que alcanzar en el debate político para llegar a negociar el fin del conflicto. Condiciones del acuerdo para el cese de hostilidades eran el mantenimiento del statu quo y que ninguna de las partes tratase de afectar la capacidad militar de la otra.

13. Sin embargo, el Gobierno volvió a esta cuestión tres meses después, en el marco general de las conversaciones de paz. Entretanto, el Gobierno redujo el perímetro del campamento unos 600 metros y prometió no poner puestos de control en la carretera para que los civiles pudiesen utilizarla libremente.

14. En lo relativo a algunas otras cuestiones planteadas por los LTTE que tenían claras consecuencias militares, como el traslado de dirigentes armados de los LTTE en el oriente, el Gobierno prometió concertar lo necesario en un anexo al acuerdo.

15. El Gobierno había informado a los LTTE de que esa y otras cuestiones que habían planteado se podrían seguir examinando y ser resueltas una vez que entraran en funciones los comités de paz compuestos de representantes extranjeros, así como de los LTTE y del Gobierno. Repetidas veces el Gobierno pidió a los LTTE que dejaran trabajar a los comités de paz. No obstante, la insistencia de los LTTE en nuevas condiciones impidió que lo hicieran.

16. Para satisfacer la condición de que se estableciera una autoridad diferente para ejecutar los proyectos de desarrollo en el norte, el Gobierno nombró un grupo de trabajo especial dirigido por un ministro del Gabinete e indicó su disposición a aceptar la participación de los LTTE en dicho grupo.

17. Los días 10 y 11 de abril de 1995, el Gobierno y los LTTE celebraron la cuarta ronda de negociaciones.

18. A pesar de la respuesta del Gobierno a las nuevas condiciones propuestas por los LTTE, el 18 de abril de 1995 éstos violaron unilateralmente el acuerdo. En una operación submarina, una unidad de LTTE hizo estallar dos barcos de la marina de Sri Lanka atracados en el puerto de Trincomalee, causando la muerte de varios marinos y heridas a otros tantos. El acuerdo para el cese de las hostilidades disponía que cada parte debía notificar que iba a poner término a la cesación de hostilidades con 72 horas de antelación. La acción hostil unilateral de los LTTE, que causó la pérdida de vidas y daños a la propiedad del Estado, violó esa disposición.

19. Los LTTE habían indicado claramente al Gobierno que el 19 de abril no era un "ultimátum" al Gobierno sino sólo un "plazo" sugerido para cumplir las diversas demandas de los LTTE. Así, la acción unilateral de los LTTE es un acto de perfidia de su parte.

20. La comunidad internacional condenó en general la violación del acuerdo por los LTTE y la reanudación de las hostilidades. Los Gobiernos de Australia, Bangladesh, el Canadá, China, Egipto, los Estados Unidos de América, la India, Indonesia, el Japón, Maldivas, el Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rusia y Tailandia, así como la Unión Europea, formularon declaraciones condenatorias de la acción de los LTTE. Después del ataque en el puerto de Trincomalee, se han producido ataques contra las fuerzas gubernamentales (incluido el derribo con proyectiles SAM de dos aviones de transporte de la fuerza aérea de Sri Lanka) y se ha dado muerte a cientos de civiles. La comunidad internacional, que anteriormente había elogiado las iniciativas de paz del Gobierno, condenó estos ataques e instó a los LTTE a proseguir las negociaciones de paz.

21. Habida cuenta del rechazo unilateral de parte de los LTTE de la iniciativa de paz del Gobierno y de su reanudación de las hostilidades, el Gobierno se ha visto obligado a dar una respuesta militar. Si bien el Gobierno está resuelto a conseguir la paz, también lo está a defender la soberanía y la integridad territorial del Estado, su seguridad y la unidad de su pueblo. El Gobierno ha hecho hincapié en que la respuesta no estaba dirigida contra la población tamil sino contra los LTTE. El proceder actual es un intento de crear condiciones propicias para la reanudación del diálogo y el estudio de un conjunto de medidas políticas.

22. El Gobierno reconoce que, dada la reanudación de la violencia por parte de los LTTE, podían cometerse violaciones de los derechos humanos. El Gobierno está plenamente resuelto a evitar cualquier tipo de ataque de represalias en otras partes del país que pudiera conducir a un incremento de la violencia.

23. Una prueba de esta determinación es la acción pronta y eficaz del Gobierno para cortar de raíz lo que parecían ser episodios organizados en el sur tras la muerte brutal de un destacado sacerdote budista a manos de los LTTE en la provincia oriental y la medida adoptada para sancionar a los culpables.

24. La comunidad internacional, en particular las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos, ha reconocido los esfuerzos realizados por el Gobierno para solucionar el conflicto étnico e iniciar un diálogo político con los LTTE. Pese a que repetidas veces el Gobierno ha tratado de comenzar un debate político de fondo para llegar a una solución negociada con los LTTE, junto con el cese de las hostilidades y la reconstrucción en el norte, los LTTE han hecho todo lo posible para aplazar ese diálogo. Los LTTE también han rechazado la propuesta del Gobierno de dar inicio a conversaciones políticas preliminares por medio de una personalidad extranjera independiente, bajo los auspicios de un gobierno extranjero.

25. El Gobierno tenía la intención de examinar una serie de propuestas primero con los LTTE y, tras conocer sus puntos de vista, entrar en conversaciones sobre el fondo de las propuestas con otros integrantes de la Alianza Popular y, posteriormente, con la oposición, incluyendo a otros partidos y organizaciones tamiles, a fin de llegar a un consenso nacional en torno al conjunto de propuestas políticas. Con la acción unilateral de los LTTE el 18 de abril de 1995 acabó súbitamente la primera etapa de la iniciativa de paz lanzada por el Gobierno en agosto de 1994.

26. El Gobierno considera que la medida unilateral de los LTTE para terminar el proceso de paz no es más que un revés pasajero en una etapa del proceso. De ningún modo se trata del fracaso del proceso de paz iniciado por el Gobierno.

27. Por su parte, a la vez que reitera su empeño de continuar con el proceso de paz, el Gobierno de Sri Lanka seguirá haciendo todo lo posible para hacer realidad el firme deseo de una paz duradera del pueblo del sur, así como del norte y del oriente.

I. PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

28. Desde que el Gobierno de Alianza Popular asumió el poder, se han iniciado diversas medidas importantes para hacer efectiva su expresa adhesión a la promoción y protección de los derechos humanos. Esas medidas ampliarán aún más el marco legislativo, ejecutivo y administrativo en Sri Lanka para dar efecto a sus obligaciones en calidad de Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A. Creación de una comisión nacional de derechos humanos

29. En foros internacionales, en particular las Naciones Unidas, Sri Lanka ha apoyado firmemente la creación de mecanismos nacionales y regionales para la promoción y protección de los derechos humanos. En resoluciones recientes de

la Comisión de Derechos Humanos, se ha singularizado a Sri Lanka como uno de los países que han adoptado medidas decisivas para establecer instituciones nacionales de derechos humanos para la promoción y protección de los derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras también han propugnado con ahínco la creación de tales instituciones nacionales.

30. El Gobierno ha aprobado la legislación destinada a crear una comisión de derechos humanos en Sri Lanka. En consecuencia, en breve se someterá al Parlamento el proyecto de ley sobre la comisión nacional de derechos humanos de Sri Lanka.

31. La comisión propuesta estará integrada por cinco miembros escogidos de entre personas con conocimientos o experiencia práctica en asuntos relacionados con los derechos humanos. Serán nombrados por el Presidente por recomendación de un consejo constitucional, órgano representativo integrado por el Primer Ministro, el dirigente de la oposición, el Presidente del Parlamento, el Presidente de la Conferencia de los principales ministros, antiguos magistrados del Tribunal Supremo y representantes de los partidos políticos que tengan escaños en el Parlamento. Al constituir el consejo de este modo se procurará que el Gobierno no tenga la exclusiva responsabilidad de nombrar a los miembros de la comisión.

32. Así, la forma de escoger a sus miembros procurará garantizar la independencia e integridad de la comisión en el desempeño de sus funciones.

33. Las funciones de la comisión serían:

- a) vigilancia de las prácticas y procedimientos ejecutivos y administrativos;
- b) investigación de denuncias de violación o inminente violación de derechos fundamentales y, cuando corresponda, previsión de su solución mediante mediación y conciliación;
- c) asesoramiento y funciones de otra índole para formular medidas legislativas, instrucciones y procedimientos administrativos, y recomendaciones al Gobierno para procurar que las leyes del país y las prácticas administrativas se ajusten a las normas y principios internacionales de derechos humanos; adherirse a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; dar a conocer y enseñar los derechos fundamentales.

34. El proyecto de ley también prevé la investigación de denuncias de la persona agraviada, o de un grupo de personas, de resultas de un acto de carácter terrorista, con lo cual se trataría la cuestión de la responsabilidad de actores incluso no estatales por violaciones de los derechos humanos, a la que se está prestando cada vez más atención internacional.

35. En virtud de la legislación propuesta, hay que notificar a la comisión todo arresto o detención realizados en virtud de la Ley de prevención del

terrorismo y de las normas para situaciones de emergencia. También sería preciso informar a la comisión del lugar de detención de dichas personas.

B. La Convención contra la Tortura

36. Sri Lanka se adhirió a la Convención contra la Tortura al depositar el instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 3 de enero de 1994. La Convención entró en vigor para Sri Lanka el 2 de febrero de 1994.

37. Al asumir el poder, el actual Gobierno dio prioridad a la aprobación de la legislación que pusiese en práctica las obligaciones contraídas por Sri Lanka en virtud de la Convención.

38. El 25 de noviembre de 1994, el Parlamento aprobó la Ley de la Convención contra la Tortura (véase el anexo II). En virtud de lo dispuesto en esa ley, los actos de tortura se tipifican como delito en Sri Lanka y toda persona declarada culpable de un delito en virtud de la Ley, después de ser juzgada en el Alto Tribunal, podrá ser sancionada con una pena de prisión de no menos de siete años y no más de diez años y una multa de no menos de 10.000 rupias y no más de 50.000 rupias.

39. Se ha modificado la Ley de extradición de Sri Lanka para que disponga la extradición por delitos de tortura. Cuando no existe un acuerdo de extradición entre Sri Lanka y cualquier otro Estado, por orden publicada en el Diario Oficial el Ministro tiene la facultad de considerar la Convención contra la Tortura un acuerdo de extradición.

C. Ley de inscripción de defunciones (disposiciones provisionales)

40. Para aliviar una parte de la angustia e inquietud que produce a los familiares el gran número de personas desaparecidas y dadas por muertas, el 25 de noviembre de 1994 el Parlamento aprobó una ley especial para la inscripción del fallecimiento de personas desaparecidas que se cree están muertas.

41. La Ley para la inscripción de defunciones (disposiciones provisionales) (véase el anexo III) establece que, cuando una persona se considere desaparecida y se la dé por muerta, quienes normalmente habrían tenido noticias de ella si estuviese con vida no han sabido de ella durante un período superior a un año, pueden acudir a la oficina del Registro Civil del distrito para inscribir el fallecimiento y obtener un certificado de defunción.

42. El Registro Civil puede expedir certificados de defunción después de efectuar una investigación si le parece cierto lo expuesto en la solicitud de inscripción.

43. Si luego resulta que una persona cuya defunción ha sido inscrita aún está con vida, el Registro Civil del distrito tiene la facultad de anular la inscripción.

44. Las disposiciones de la ley estarán en vigencia por un período de dos años a partir de su fecha de entrada en vigor.

45. Esta ley servirá de consuelo a muchas familias cuyos integrantes "desaparecieron" durante los disturbios civiles que ocurrieron por actividades terroristas y subversivas.

D. Sobornos

46. Ante el descontento general la ineficacia de la lucha contra la corrupción en la vida pública, el Gobierno de Alianza Popular estimó que tenía carácter prioritario la necesidad de modificar la Ley sobre el soborno y crear una comisión permanente e independiente de sobornos.

47. El 5 de octubre de 1994, el Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de Ley (enmienda) sobre el soborno y el proyecto de Ley sobre la comisión para investigar denuncias de soborno o corrupción (véase el anexo IV).

1. Modificación de la Ley sobre el soborno

48. Desde 1889, el Código Penal de Sri Lanka ha tipificado el delito de soborno. Se dio más fuerza a la disposición legislativa en 1954 mediante la promulgación de la Ley sobre el soborno de ese año, que ha sido modificada ocho veces.

49. La modificación de 1994 trata de corregir algunos defectos y deficiencias.

a) Nuevo delito de corrupción

50. Se consideró que el soborno, tal como estaba definido en la Ley de 1954, tenía un alcance limitado. Así, se tipificó un nuevo delito denominado "corrupción" que comprende toda utilización de un cargo público para provecho personal. Es un delito residual, que incluye algunas situaciones que no están debidamente comprendidas en la definición del delito de soborno.

b) Aclaración del término "funcionario público"

51. En la Ley, el término "funcionario público" se refiere a funcionarios, servidores y empleados del Estado. Sin embargo, no se refiere específicamente a los ministros, viceministros, miembros del Parlamento, miembros de los consejos provinciales, etc., poniendo así en tela de duda si estas personas corresponden a lo que dice la definición. Por lo tanto, la enmienda disipa esta duda al incluir a los ministros y demás funcionarios superiores en la definición del término "funcionario público".

c) Pérdida o decomiso de bienes

52. La Ley sobre el soborno dispone una serie de penas como la imposición de una multa y la prisión. En virtud de la nueva modificación, el castigo del delito de soborno o corrupción podría incluir la pérdida o decomiso de

bienes, a condición de que medie una sentencia judicial que establezca una causa directa entre el delito de soborno y la adquisición de dichos bienes. No obstante, la modificación protege los derechos de propiedad de terceros.

2. Comisión para investigar denuncias de soborno o corrupción

53. El Gobierno de Alianza Popular decidió que era preciso crear una comisión permanente independiente para investigar denuncias de soborno en vista de que el Departamento del Comisionado sobre Sobornos funcionaba como un departamento gubernamental y no un organismo independiente. Además, es el Presidente quien designa las comisiones de investigación de denuncias de soborno en virtud de la Ley de comisiones de investigación o de la Ley de comisiones presidenciales especiales de investigación. Este procedimiento tampoco promueve la imparcialidad de la comisión.

54. La nueva comisión ha de ser imparcial, independiente y permanente. Está compuesta de tres personas: dos magistrados jubilados y una tercera persona con experiencia en realizar investigaciones.

55. El Presidente nombrará a los tres miembros por recomendación del Consejo Constitucional, órgano representativo integrado por el Primer Ministro, el jefe de la oposición, el Presidente del Parlamento, el Presidente de la Conferencia de los principales ministros, antiguos magistrados del Tribunal Supremo y representantes de los partidos políticos que tengan escaños en el Parlamento. Al constituir el Consejo de este modo se procurará que el Gobierno no tenga la exclusiva responsabilidad de nombrar a los miembros de la comisión. Hasta la modificación de la Constitución de Sri Lanka para que disponga el nombramiento del Consejo Constitucional, el Presidente hará los nombramientos por recomendación del Primer Ministro en consulta con el Presidente del Parlamento.

56. Cuando la Comisión reciba una denuncia, deberá efectuar una investigación. Si considera que existen indicios de delito, tiene la facultad de perseguir al presunto delincuente ante el Alto Tribunal. También tendrá la facultad de dar instrucciones (válidas por un plazo de tres meses únicamente) al Contralor de Inmigración y Emigración de confiscar el pasaporte de quienes estén siendo investigados.

57. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley sobre la comisión para investigar denuncias de soborno o corrupción (véase el anexo V), el Gobierno ha nombrado una comisión compuesta de tres personas con efecto a partir del 15 de diciembre de 1994.

E. Medidas para el funcionamiento más eficaz
del cargo de ombudsman

58. El cargo de ombudsman fue creado en 1981 para que las personas pudiesen resolver sus quejas acerca de la violación de un derecho fundamental u otra injusticia cometida por un funcionario público o funcionario de una empresa pública, autoridades locales u otra institución análoga. Estaba previsto que sería un medio menos dilatorio y más barato de resolver los motivos de queja.

La ley disponía un procedimiento prolongado de acceso al ombudsman, a saber, por conducto de un miembro del Parlamento, el Comité de peticiones parlamentarias, el Secretario General del Parlamento y el Presidente del Parlamento, que restringía enormemente el acceso del público al ombudsman, y menoscababa la eficacia del cargo.

59. Se exigía al ombudsman que comunicase su decisión al Comité de peticiones públicas, el cual, por propia discreción, después de examinarla podría comunicar al Parlamento su opinión acerca de la medida que hubiese que adoptar.

60. Para dar más eficacia al cargo de ombudsman, al asumir el poder el Gobierno de Alianza Popular adoptó la iniciativa de promulgar la Ley N° 26 de 1994 (enmienda) sobre el Comisionado Parlamentario de la Administración (véase el anexo VI). La enmienda prevé:

- a) Que las denuncias sean comunicadas directamente al ombudsman.
- b) Que el ombudsman comunique su decisión directamente al jefe de la institución en cuestión y al ministro del ramo. Asimismo, el ombudsman exigirá que el jefe de la institución en cuestión notifique, en un plazo determinado, las medidas que ha adoptado para dar efecto a las recomendaciones del ombudsman. Si, dentro de dicho plazo, no se adopta ninguna medida adecuada o apropiada, el ombudsman tendrá que enviar su informe tanto al Presidente como al Parlamento.

Se espera que estos requisitos garanticen un mecanismo más eficaz de cumplimiento.

61. Al disponer un acceso directo al ombudsman, es probable que aumente enormemente el número de peticiones que reciba. Por lo tanto, se ha propuesto nombrar a más de un ombudsman para que investiguen las denuncias que surjan en distintas esferas como la docencia o la banca.

F. La situación de emergencia

62. El estado de emergencia proclamado el 18 de mayo de 1983 terminó por proclamación presidencial el 11 de enero de 1989. Sin embargo, en función de la seguridad nacional, posteriormente el Gobierno invocó la parte II de la Ordenanza de seguridad pública y declaró el estado de emergencia nacional a partir del 20 de junio de 1989 por la gradual escalada de la violencia, los actos de sabotaje y la interrupción de los servicios esenciales en todo el país.

63. Después de reconsiderar la situación de seguridad, el nuevo Gobierno de Alianza Popular decidió poner término al estado de emergencia a partir del 4 de septiembre de 1994, salvo en las provincias septentrional y oriental y algunas zonas fronterizas con estas dos provincias, que fueron especificadas en la proclamación presidencial del 1° de septiembre de 1994, hecha en virtud de la Ordenanza de seguridad pública.

64. A partir del 24 de octubre de 1994, el Gobierno restableció el estado de emergencia en toda la isla dada la incierta situación de seguridad que reinaba después de la explosión de una bomba que dio muerte al candidato presidencial de la oposición y a más de 50 otras personas.

65. El Gobierno decidió proseguir el estado de emergencia a partir del 4 de noviembre de 1994 únicamente en las provincias septentrional y oriental y la ciudad de Colombo y sus inmediaciones (en virtud de una proclamación). El estado de emergencia se ha mantenido en la ciudad de Colombo para facilitar la investigación de la explosión del 24 de octubre de 1994.

66. El estado de emergencia en Colombo y sus inmediaciones fue levantado brevemente el 8 y 9 de noviembre de 1994 para que se pudiese celebrar la elección presidencial.

67. La proclamación del estado de emergencia ha sido comunicada al Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a las obligaciones asumidas por Sri Lanka en virtud del artículo 4 del Pacto.

G. Nombramiento de una comisión para investigar la violencia con motivo de las elecciones y recomendar el pago de indemnización por la pérdida de vidas

68. Por recomendación del Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, la Presidenta designó una comisión unipersonal de investigación, con arreglo a la Ley N° 17 de 1948 de comisiones de investigación, para que investigara e informara sobre:

- a) si los episodios de violencia que ocurrieron durante el período inmediatamente anterior y posterior a las elecciones parlamentarias del 16 de agosto de 1994 y guardaban relación con la celebración de las elecciones, tuvieron como consecuencia la pérdida de la vida de alguna persona; y
- b) para que recomendase, cuando se estimase razonable, el pago a los familiares a cargo de dichas personas de la indemnización que se considerare justa y equitativa en virtud de las circunstancias.

69. La Comisión ha presentado su informe definitivo en que se ha recomendado el pago de indemnización en 35 casos, de un total de solicitudes hechas respecto de 60 personas. El Gobierno está pagando la indemnización sugerida por la Comisión.

H. Nombramiento de un comité para investigar los asuntos relacionados con las personas detenidas en virtud de la Ley N° 48 de 1979 de prevención del terrorismo y las normas de emergencia

70. Dada la considerable inquietud de los interesados por el retraso en la resolución de los casos relacionados con personas bajo custodia, por pretendidos delitos cometidos en virtud de la Ley de prevención del

terrorismo y las normas de emergencia, el Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales designó un comité para que investigara los asuntos relacionados con las personas así detenidas. Un antiguo magistrado del Tribunal Supremo presidió el comité.

71. Las atribuciones del comité eran investigar e informar sobre:

- i) el número y la identidad de las personas que están detenidas en virtud de la Ley N° 48 de 1979 de prevención del terrorismo y las normas de emergencia;
- ii) si es preciso que sigan detenidas en virtud de dicha Ley o normas;
- iii) las medidas que hubiere que adoptar para acelerar la conclusión de los procedimientos que estuviesen en curso contra dichas personas;
- iv) las medidas que hubiere que adoptar para mejorar las condiciones de detención de dichas personas.

72. El Comité ha presentado su informe definitivo que recomienda la revocación inmediata de las órdenes de detención de 140 personas que el Procurador General ha decidido no procesar pero permanecen bajo detención. En consecuencia, el Ministerio de Defensa ya ha revocado las órdenes de detención de 138 detenidos. En cuanto a los otros dos, uno ya ha sido acusado ante el Alto Tribunal de Colombo y el Procurador General está examinando las actas de la instrucción del otro.

I. Nombramiento de las comisiones para investigar denuncias de personas que se supone han sido desalojadas involuntariamente o han desaparecido de su domicilio

73. Se ha denunciado que a partir de 1988 algunas personas han sido desalojadas contra su voluntad o han desaparecido de su domicilio a raíz de la grave situación de seguridad imperante en el país a la sazón. Pese a que una comisión había estado investigando aspectos relacionados con las desapariciones, su mandato estaba restringido a investigar las desapariciones ocurridas a partir de enero de 1991. Al estimar necesario investigar asuntos relacionados con las personas desaparecidas, el Gobierno de Alianza Popular designó tres comisiones para que se ocuparan de tres regiones geográficas de la isla con un mandato amplio de investigar e informar sobre estos asuntos a efecto de dar alivio y desagraviar con una indemnización a los familiares de las personas que se determinase que han desaparecido o han sido desalojadas de este modo.

74. Las tres comisiones deberán investigar:

- a) si alguien ha sido desalojado involuntariamente o ha desaparecido de su domicilio después del 1° de enero de 1988;

- b) las pruebas disponibles para establecer los pretendidos desalojos o desapariciones;
- c) el paradero de quienes supuestamente han sido desalojados o desaparecido;
- d) la persona o personas que fuesen responsables de los pretendidos desalojos o desapariciones;
- e) las actuaciones jurídicas que se pueden iniciar contra los pretendidos responsables;
- f) las medidas necesarias para impedir futuras repeticiones de esas actividades;
- g) la reparación que corresponda hacer a los padres, cónyuges y personas a cargo de quienes habrían sido desalojados o desaparecidos.

Las comisiones están en sesión.

75. Cabe esperar que en breve la Comisión presidencial de investigación de las desapariciones involuntarias en las provincias occidental, meridional y de Sabaragamuwa presente un informe provisional a la Presidenta.

J. Indemnización a las familias de las víctimas de la insurrección

76. El Gobierno va a dar apoyo financiero a las familias de los muertos durante el período de violencia en Sri Lanka a fines del decenio de 1980. Los familiares de unas 20.000 personas que resultaron muertas por las acciones del Frente Popular de Liberación (JVP) y otros se beneficiarán de este programa.

77. En virtud del actual "Plan relativo a las personas más afectadas", está previsto hacer un pago de entre 15.000 y 20.000 rupias a los familiares de las víctimas de la insurrección, a condición de que se presenten informes de policía y certificados de defunción. Sin embargo, los deudos de los muertos no pudieron conseguir los certificados de defunción porque la policía había dado por desaparecidas a las víctimas. En virtud del nuevo plan, la mayor parte de la indemnización se paga cuando la familia presenta una declaración jurada y el resto cuando se presenta el certificado de defunción. La aprobación de la Ley (de disposiciones provisionales) de inscripción de defunciones (anexo VII) en gran medida pondría remedio a esta situación.

K. Establecimiento de un grupo de trabajo de derechos humanos

78. La Presidenta y Ministra de Defensa ha promulgado normas en virtud del artículo 5 de la Ordenanza de seguridad pública relativas a la creación del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos (anexo VIII). Estas normas, junto con las instrucciones administrativas dadas por la Presidenta en virtud de ellas, robustecen el mecanismo en vigencia de diversas formas.

- a) Todo miembro de las fuerzas armadas y de la fuerza de policía apoyará y facilitará el ejercicio de las facultades, obligaciones y funciones del Grupo de Trabajo y de toda persona autorizada por éste en virtud de las normas y procurará que se respeten los derechos fundamentales de las personas detenidas o encarceladas.
- b) Nadie será detenido o encarcelado en virtud de las normas de emergencia o la Ley N° 48 de 1979 de prevención del terrorismo, salvo conforme a la ley y el procedimiento adecuado y por una persona autorizada por ley a proceder a la detención u ordenar la prisión.
- c) Al momento de la detención o, de no ser posible, en virtud de las circunstancias, tan pronto se pueda después:
 - i) quien practique la detención o el encarcelamiento dirá su nombre y graduación a la persona detenida o a cualquier pariente o amigo de ésta que se los pida;
 - ii) toda persona detenida o encarcelada será notificada del motivo de la detención;
 - iii) quien practique la detención o encarcelamiento expedirá, previa solicitud, un escrito ("hoja de detención") en el momento de la detención o encarcelación en que se indique el nombre y graduación del oficial que practica la detención, la hora y fecha de la detención y el lugar en que se mantendrá a la persona detenida o encarcelada;
 - iv) se facilitará a la persona detenida medios razonables de comunicarse con un pariente o amigo para que sus familiares conozcan su paradero.
- d) Cuando se trate de la detención o encarcelamiento de un menor de 12 años de edad o de una mujer, se permitirá que una persona escogida por el niño o la mujer los acompañe al lugar del interrogatorio. En lo posible, el niño o la mujer deberán ponerse al cuidado de una unidad femenina de las fuerzas armadas o la policía o al cuidado de otra funcionaria militar o de policía.
- e) La declaración de la persona detenida o encarcelada deberá tomarse en el idioma que ella escoja y se le pedirá que la firme. Se deberá permitir que quien quiera hacer una declaración de su puño y letra lo haga.
- f) Se deberá permitir a los miembros del Grupo de Trabajo o a cualquier persona autorizada por éste el acceso a la persona arrestada o detenida en virtud de la Ley N° 48 de 1979 de prevención del terrorismo o en virtud de una norma adoptada con arreglo a la Ordenanza de seguridad pública (cap. 40) y la entrada en cualquier

momento a todo lugar de detención, comisaría o cualquier otro lugar en que la persona esté detenida o encarcelada.

- g) Todo funcionario que practique una detención o encarcelamiento informará al Grupo de Trabajo o a cualquier persona autorizada para recibir una notificación en su nombre, de dicha detención o encarcelamiento y del lugar en que la persona esté detenida o encarcelada.

79. Las instrucciones administrativas dadas personalmente por el Presidente a los jefes de las fuerzas armadas y al inspector general de policía son una medida singular, que es vital para la protección de los derechos humanos en tiempos revueltos. En ellas se exponen en detalle los requisitos que hay que cumplir al proceder a una detención o mantener a alguien bajo custodia. Están destinadas a garantizar la cabal observancia del debido proceso de ley y se ajustan a las obligaciones adquiridas por Sri Lanka en virtud del Pacto.

L. Grupo asesor en materia de derechos humanos

80. Se ha establecido un comité de asesoramiento compuesto de representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos para ayudar al Ministro de Relaciones Exteriores en las cuestiones pertinentes a los derechos humanos, en particular las relativas a las obligaciones internacionales adquiridas por Sri Lanka en este sentido. Los miembros del comité desempeñan sus funciones a título personal y honorífico. Su designación de ningún modo les impide seguir defendiendo públicamente los derechos humanos, en particular criticar o censurar la actuación del Gobierno en este sentido. Esto es una prueba más del reconocimiento por el Gobierno de la necesidad de un diálogo constante con organizaciones no gubernamentales independientes acerca de las cuestiones de derechos humanos, así como de su firme adhesión a una gestión oficial abierta y transparente.

II. DESIGNACION DE UN COMITE ESPECIAL DEL PARLAMENTO SOBRE LA CONSTITUCION

81. El Comité Especial del Parlamento sobre la Constitución ha sido nombrado bajo la dirección del Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales.

82. En relación con el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, se ha propuesto mejorar y fortalecer los derechos fundamentales vigentes. Entre los nuevos derechos cuyo reconocimiento ha sido propuesto figuran:

- i) el derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;
- ii) el derecho a no ser objeto de injerencias ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación;
- iii) el derecho a la vida;

- iv) el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
- v) el derecho a estar informado;
- vi) el derecho de un pariente o amigo a presentar una petición relativa a los derechos fundamentales cuando la persona agraviada no pueda o sea incapaz de hacerlo por motivos de impedimento físico, social o económico, o por una causa análoga, con el consentimiento de la persona agraviada, o el derecho de un grupo de personas a hacerlo si la petición es de interés público y la persona agraviada no tiene objeción a ella.

83. Con estas disposiciones el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución se ajustaría a las obligaciones contraídas por Sri Lanka en virtud del Pacto. Teniendo en cuenta estas obligaciones, también se analizarán las limitaciones actuales al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
